

RAMA JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA

Santa Marta, veintiuno (21) de abril de 2022.

REF.: PROCESO EJECUTIVO A CONTINUACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO SEGUIDO POR MARTIN GOMEZ SANTANA CONTRA COLPENSIONES. RAD.20199-229.

Pretende el señor **MARTIN FERNANDO GOMEZ SANTANA** que se libre mandamiento de pago a cargo de **COLPENSIONES**, representado por su Gerente, tal como lo permiten los artículos 305 y 306 del C. G. P, aplicables por disposición del artículo 145 del C.P.T., teniendo como título ejecutivo la sentencia de primera instancia de fecha 27 de mayo de 2019, la cual fue objeto de apelación y el H. Tribunal en sentencia de fecha 23 de noviembre de 2020, modifica el numeral primero de la sentencia de primera instancia.

Procede el Juzgado a decidir la solicitud de la ejecución, previas las siguientes;

C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico:

- 1.2 La sentencia proferida en primera y segunda instancia constituyen título ejecutivo.
- 1.3 Es procedente la medida cautelar de embargo y retención de dineros solicitada por la parte ejecutante.

2. Tesis

- 2.1 Si, por contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible.
- 2.2 Con respecto a la medida de embargo y retención de dineros, la misma es procedente por ser esta una obligación pensional donde está en juego derecho fundamentales, y en virtud de ello opera la excepción al principio de inembargabilidad.

3. Fundamentos normativos.

3.1. Como título de recaudo ejecutivo se tiene la la sentencia de primera instancia de fecha 27 de mayo de 2019, la cual fue objeto de apelación y el H. Tribunal en sentencia de fecha 23 de noviembre de 2020, modifica el numeral primero de la sentencia de primera instancia.
El Art. 306 del Código General del Proceso preceptúa:

“Ejecución. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.

Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente”.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 422 del CGP pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyen plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativo o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia.

Y de conformidad con el artículo 100 del C. P. T. y S. S, el título ejecutivo laboral, es todo documento que provenga del deudor o de su causante, siempre que él, conste una obligación clara, expresa y exigible de dar, hacer, o no algo a favor de su acreedor o tenedor legítimo del título o una providencia judicial o arbitral en firme de igual contenido.

3.2. El principio de inembargabilidad no es absoluto. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, dispone que son inembargables entre otros, “1. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, y 2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas...”.

La línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, con respecto al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, enseña que tal principio no puede ser considerado absoluto.

Ha sostenido la Corte Constitucional que el principio de inembargabilidad de los bienes y recursos del Estado tienen sustento constitucional tendiente

a asegurar la consecución de los fines de interés general que conlleva la necesidad de efectivizar materialmente los derechos fundamentales, así como el cumplimiento de los distintos cometidos estatales. En otros términos, este principio que se predica del presupuesto de los órganos y entidades del Estado, propende por la protección de los recursos financieros, destinados a la satisfacción de los requerimientos indispensables para realizar la dignidad de la persona humana. (Sentencias C-546 de 1992, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, C-354 de 1997, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y C-192 de 2005).

Pero al mismo tiempo, la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha sostenido que el principio de inembargabilidad del presupuesto de las entidades y órganos del Estado encuentra algunas **excepciones, así: (i)** cuando se trate de créditos laborales, cuya satisfacción se hace necesaria para realizar el principio de dignidad humana y efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (sentencia C-546 de 1992, línea jurisprudencial reiterada en las sentencias C-013 de 1993, C-107 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T-262 de 1997, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004); **(ii)** cuando se trate de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones judiciales (sentencia C-354 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002 y C-402 de 1997), y, **(iii)** cuando se trate de títulos que provienen del Estado deudor y que configuran una obligación clara, expresa y actualmente exigible (sentencias C-103 de 1994, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999 y T-539 de 2002).

La excepción al principio de inembargabilidad derivado de la efectividad de la cancelación o pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de relaciones laborales impone la posibilidad de embargar los bienes y recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación, debido a que los derechos laborales son materia privilegiada y por ende la especial protección que se prodiga de los mismos por parte del Estado. Es entonces, la especial protección que la Carta Política otorga al derecho al trabajo por su carácter de valor fundante del Estado Social de Derecho, que surge esta excepción constitucional a la inembargabilidad del presupuesto.

De la misma manera, la excepción de inembargabilidad derivada de los derechos contenidos en sentencias judiciales y en títulos en los que se incluya una obligación clara, expresa y actualmente exigible, propugnan por la garantía, del principio de la seguridad jurídica, así como por el respeto de los derechos reconocidos a las personas en los aludidos títulos ejecutivos.

La sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en proveído de fecha 31 de agosto de 2012, radicación No. 00454/12 sostuvo que:

“Empero, este Tribunal postula la tesis de que tal inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Pensiones no es absoluta. Se rompe la regla general impuesta por la norma en los eventos en que con el embargo de tales recursos se busque el pago de pensiones. La defensa de esta propuesta es sumamente sencilla y demasiado simple: si estos recursos se protegen a través del expediente de tornarlos inembargables, justamente para garantizar que con ellos se logre el pago efectivo y oportuno de las pensiones (vejez, invalidez y sobrevivientes) y no se tomen para el cubrimiento de otros rubros, no tiene sentido que se potencie la prohibición cuando el proceso ejecutivo y la consecuente medida cautelar se ha producido para obtener los recaudos monetarios indispensable para conseguir la satisfacción efectiva de pensiones, cuyo pago no se ha obtenido que lo haga voluntariamente el deudor y que ha colocado al acreedor en la imperiosa necesidad de acudir a la ejecución forzosa y a los mecanismos legítimos de coerción y de compulsión.

Claro que si al ejecutivo y a la medida cautelar los guía el designio de conseguir el pago de pensiones, nada sería más injusto que pretender atajar tal cometido con una prohibición de inembargabilidad que, en esa hipótesis, carece de toda significación, porque es palmar que se utilizan los recursos del sistema en plena correspondencia con su natural vocación: la de cubrir las pensiones.”

4. Caso Concreto.

4.1 Del título Ejecutivo.

Como título de recaudo ejecutivo se tiene la la sentencia de primera instancia de fecha 27 de mayo de 2019, la cual fue objeto de apelación y el H. Tribunal en sentencia de fecha 23 de noviembre de 2020, modifica el numeral primero de la sentencia de primera instancia.

En la sentencia proferida en esta instancia se dispuso:

PRIMERO: CONDENAR a COLPENSIONES al reconocimiento y pago del retroactivo pensional y las diferencias pensionales por el reajuste y reliquidación, sobre las mesadas reconocidas a favor del señor **MARTIN FERNANDO GOMEZ SANTANA** desde el 9 de julio de 2016 hasta el 31 de enero de 2020 en una cuantía de **\$14.959.112** más las diferencias que se sigan causando hasta hacer efectivo su pago en la nómina correspondiente. Se fija mesada pensional para el año 2020 a favor del señor **MARTIN FERNANDO GOMEZ SANTANA** en la suma de **\$1.187.292**.

SEGUNDO: PRIMERO: CONDENAR a COLPENSIONES al reconocimiento y pago favor del señor **MARTIN FERNANDO GOMEZ SANTANA** a la indexación del retroactivo pensional por las mesadas del 1 de octubre de 2016 hasta el 31 de enero de 2020, indexación que deberá efectuar hasta el momento en que se realice el pago.

TERCERO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas antes del 9 de julio de 2016.

CUARTO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de **descuento en cotizaciones de salud** y por tanto se autoriza a colpensiones al descuento de dichos aportes de las otorgadas exclusivamente desde el 9 de julio de 2016 al 30 de septiembre de ese mismo año, no accediendo a los descuentos por las diferencias generadas a partir del 1 de octubre de 2016 en adelante.

QUINTO: ABSOLVER a la entidad demandada COLEPNSIONES por las pretensiones de intereses moratorios y de incremento por el 14% a cargo de acuerdo al ART 21 del decreto 049 de 1990.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada, se tasan agencias en derecho en un 7% de conformidad al Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura.

El Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Santa Marta a través de sentencia de fecha 23 de noviembre de 2020, modifico la decisión de primera instancia.

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Vente (2020), proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, en el sentido de **CONDENAR** a colpensiones a reconocer y pagar retroactivo pensional y las diferencias pensionales por el reajuste y liquidación sobre mesada reconocidas al demandante del 9 de julio de 2016 al 31 de enero de 2020, por valor de Catorce Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta Pesos con 86/ 100 ML (**\$14.889.690,86**) La mesada para el año 2020 es la suma de **\$1.185.686,60**

SEGUNDO: SE CONFIRMA EN TODO LO DEMÁS LA REFERIDA SENTENCIA.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.”

- **De la solicitud de mandamiento de pago.**

El apoderado del ejecutante mediante escrito pretende el pago de la sentencia proferida por en primera y segunda instancia.

- Por concepto de retroactivo pensional y las diferencias pensionales causadas desde el 9 de julio de 2016 al 31 de enero de 2020, la suma de **\$14.889.680,86**.
- Por concepto de indexación causado del mes de 31 de enero de 2020 a marzo de 2022 la suma de **\$1.764.660,61**.

N°	VALOR HISTORICO	INDICE FINAL	INDICE INICIAL - ENE/20	FACTOR	INDEXACION
1	14.889.680,86	116,65	104,29	1,1185157	1.764.660,61
TOTAL INDEXACIÓN				1.764.660,61	

- Por concepto de costas ordinarias la suma de **\$1.042.277,66**.

5. Conclusión.

Del título ejecutivo que se encuentra en el expediente, resulta que COLPENSIONES, adeuda al señor **MARTIN FERNANDO GOMEZ SANTANA** los valores tasados a continuación:

- Por concepto de retroactivo pensional y las diferencias pensionales causadas desde el 9 de julio de 2016 al 31 de enero de 2020, la suma de **\$14.889.680,86**. De esta suma se debe descontar las cotizaciones en salud (*julio de 2016 a septiembre de 2016*) en suma equivalente a **\$362.558,16** quedando un total de **\$14.527.122,70**.
- Por concepto de indexación causado del mes de 31 de enero de 2020 a marzo de 2022 la suma de **\$1.764.660,61**.
- Por concepto de costas ordinarias la suma de **\$1.042.277,66**

TOTAL, OBLIGACION \$17.334.060,97

Teniendo en cuenta lo expuesto se debe librar mandamiento de pago por la suma total de **\$17.334.060,97** más costas del proceso ejecutivo. Cantidad expresa y clara y actualmente exigible, para que sea procedente el mandamiento de pago por vía ejecutiva solicitado (Art. 100 y 101 del CST y S.S. y Art. 422 del C.G.P.

RESUELVE:

PRIMERO: LIBRAR orden de pago contra **COLPENSIONES** y a favor del señor **MARTIN FERNANDO GOMEZ SANTANA**, por la suma de **\$17.334.060,97** más costas del proceso ejecutivo por los siguientes conceptos:

- Por concepto de retroactivo pensional y las diferencias pensionales causadas desde el 9 de julio de 2016 al 31 de enero de 2020, la suma de **\$14.889.680,86**. De esta suma se debe descontar las cotizaciones en salud (*julio de 2016 a septiembre de 2016*) en suma equivalente a **\$362.558,16** quedando un total de **\$14.527.122,70**.
- Por concepto de indexación causado del mes de 31 de enero de 2020 a marzo de 2022 la suma de **\$1.764.660,61**.
- Por concepto de costas ordinarias la suma de **\$1.042.277,66**.

SEGUNDO: Para que el juicio no sea ilusorio en sus efectos decretese el embargo de las sumas de dinero que tenga o llegare a tener el **COLPENSIONES** identificado con el Nit. No.900336004-7, a cualquier título, en cuenta corriente o ahorro en la siguiente entidad bancaria así: Banco de Occidente en una suma igual a **\$18.027.423,41** la cual considera el juzgado como suficiente para la seguridad del pago demandado.

TERCERO: Notifíquese a la demandada del presente proveído de conformidad artículo 306 del C.GP, por estado.

CUARTO: MANTÉNGASE en secretaría el expediente hasta tanto no se venzan los términos para que la ejecutada Colpensiones, presente las excepciones correspondientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MARIA ISABEL CIFUENTES SIERRA

Jueza

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO.

Santa Marta. – En la fecha 22 **de abril de 2022**, se notifica el auto precedente por ESTADOS N°25, fijados a las 08:00 a.m.

Secretario (a)

Firmado Por:

Maria Isabel Cifuentes Sierra

Juez

Juzgado De Circuito

Laboral 001

Santa Marta - Magdalena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **28b8c741c9a6fef87fbeatf2f7fe32aa57b6c7287b8da1c7039a37bcd5148e1b**

Documento generado en 21/04/2022 10:52:20 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>